

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 13
O R D I N A R I A
MARTES 29 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veinte minutos del martes veintinueve de enero de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número doce, Ordinaria, celebrada el veintiocho de enero de dos mil trece.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el veintinueve de enero de dos mil trece:

II. 1. 34/2010

Controversia constitucional 34/2010 promovida por el Estado de Quintana Roo, a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en contra del Presidente de la República y otras autoridades, respecto de la invalidez de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010 "Prácticas Comerciales-Requisitos Informativos para la Prestación del Servicio de Tiempo Compartido", publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diez y su modificación publicada el quince de julio siguiente. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: *"PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto del numeral 5.2.1.1 de la Norma Oficial Mexicana número NOM-029-SCFI-2010, Prácticas Comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diez. TERCERO. Se reconoce la validez de los numerales 2, 4, 4.1, 4.4, 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.5.17 y 9, de la Norma Oficial Mexicana número NOM-029-SCFI-2010, Prácticas Comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecisiete de mayo de dos mil diez, y los numerales 5.2.1.1, 5.3.1, 5.5.14 y 8.1 de la norma modificada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio del citado año. CUARTO.*

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo.

El señor Ministro ponente Franco González Salas manifestó que su proyecto ajustado propone no tomar en cuenta la ampliación de la demanda y que, por ende, se analice el concepto de invalidez de la demanda relativo a los numerales 2, 4, 4.1, 4.4, 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.5.17 y 9 de la Norma Oficial Mexicana impugnados al considerar que trasgreden lo previsto en los artículos 16, 7, 73, 121 y 124 constitucionales al establecer modalidades y restricciones al uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles de Quintana Roo.

Manifestó que en el proyecto se propone declarar infundado el primer concepto de invalidez pues se sostiene que los numerales impugnados son congruentes con lo previsto en los artículos 28 y 73, fracciones X y XXIX, en relación con el diverso 124 de la Constitución, de tal manera que corresponde a la Federación la tutela de los consumidores pues las Normas Oficiales Mexicanas son el instrumento de que se vale el legislador federal para tal fin previendo las características y especificaciones que debe reunir la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor.

Además, estimó que la referida norma no es violatoria del artículo 121 constitucional que confiere a la legislatura local la atribución de legislar en materia contractual civil y de bienes inmuebles; como tampoco del diverso 27 de la Norma Fundamental, para imponer modalidades a la propiedad privada, pues en la norma impugnada no se regula la propiedad privada sino la prestación del tiempo compartido mediante el pago de una cantidad, sin que en el caso de los inmuebles, se transmita su dominio.

Agregó que de acuerdo con su propuesta, si bien la prestación del servicio de tiempo compartido recae en un inmueble, no implica que se esté estableciendo un nuevo régimen de la propiedad privada, ni su restricción o modalidad, pues subsiste en la forma y términos que la prevé la legislación de la entidad. Por tanto, propuso reconocer la validez de los numerales impugnados.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que al haberse aprobado la sesión anterior que en primer lugar se abordara el estudio de fondo, no insistiría en su punto de vista.

Asimismo, propuso que se ampliara el estudio relativo al derecho mercantil y a la protección al consumidor respecto de los tiempos compartidos y se enfatice que no se afectan las competencias de la entidad federativa.

El señor Ministro Valls Hernández estimó que en relación con la competencia del Estado prevista en el numeral 9 de la norma impugnada debía matizarse la

propuesta en el sentido de que con la emisión de la norma impugnada no se invade la esfera de competencia del legislador federal pues no se plantea un argumento relativo a dicha invasión, sino a la imposibilidad de que los requisitos a que se refiere la norma oficial se establezcan en una norma de este tipo por considerar que deben estar previstos en una ley en sentido formal y material, por lo que estimó que el concepto de invalidez es infundado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó a favor de la propuesta y propuso establecer en el proyecto que las normas oficiales derivan de lo previsto en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, además, de que la ley que establece las normas a que se sujetarán los contratos celebrados en el régimen de tiempo compartido en el Estado de Quintana Roo no es parámetro de validez de dichas normas, toda vez que debía analizarse su constitucionalidad a la luz de preceptos precisamente federales.

El señor Ministro ponente Franco González Salas aceptó las propuestas de los señores Ministros Cossío Díaz, y Zaldívar Lelo de Larrea, solicitando a este último que aclare el argumento relativo a la inconstitucionalidad del precepto por no ser acorde con las leyes en la norma oficial.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea propuso reforzar el proyecto con el argumento relativo a que la ley local no puede ser parámetro de validez de las normas

oficiales, toda vez que éstas corresponden a la materia federal.

El señor Ministro Franco González Salas aceptó dicha propuesta. Asimismo aceptó la diversa del señor Ministro Valls Hernández, con la salvedad de que existe un argumento que cuestiona que se invadan las facultades del legislador federal a través de la norma oficial mexicana, por lo que manifestó que en caso de que en el engrose no se acepte esta observación, sería conveniente que el señor Ministro Valls Hernández reservara su derecho para formular, en su caso, voto concurrente.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando séptimo del proyecto, se aprobó por unanimidad de votos.

Por ende, los puntos resolutivos se aprobaron en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se tiene por no interpuesta la ampliación de demanda, suscrita por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en términos del segundo considerando.

TERCERO. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto del numeral 5.2.1.1 de la Norma Oficial Mexicana número NOM-029-SCFI-2010,

Prácticas Comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diez.

CUARTO. Se reconoce la validez de los numerales 2, 4, 4.1, 4.4, 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.5.17 y 9, de la Norma Oficial Mexicana número NOM-029-SCFI-2010, Prácticas Comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecisiete de mayo de dos mil diez.

QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 66/2010

Controversia constitucional 66/2010 promovida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de los Acuerdos de Equivalencia de los Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de los Estados Unidos de América y Canadá a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SCFI-1993, NOM-016-SCFI-1993 y NOM-019-SCFI-1998, respecto de los aparatos electrónicos

de uso doméstico y en oficina y seguridad de equipo de procesamiento de datos, así como la Vigésima Modificación al Acuerdo por el que se emiten Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, expedidos por la Secretaría de Economía. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se reconoce la validez del “Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá”, el “Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá”, el “Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los*

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

Estados Unidos de América y de Canadá” y la “Vigésima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior”; todos expedidos por la Secretaría de Economía y publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de agosto de dos mil diez. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno los considerandos primero, competencia; segundo, oportunidad; tercero, legitimación activa; cuarto, legitimación pasiva y quinto, en cuanto se propone desestimar la causa de improcedencia que hace valer el Poder Ejecutivo Federal en el sentido de que debe sobreseerse en el juicio, los que se aprobaron por unanimidad de votos con la observación de la señora Ministra Luna Ramos relativa al considerando segundo agregando que la calificación de norma general obedeció lo sostenido por la Primera Sala al resolver el recurso de reclamación 33/2010.

El señor Ministro Cossío Díaz, en relación con el considerando sexto en cuanto se hace referencia al marco normativo, se manifestó en contra de la propuesta pues estimó que no se trata de un asunto que deba

fundamentarse en términos del artículo 131 constitucional, lo que abordaría al entrar al análisis del considerando séptimo.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que de acuerdo con el criterio que ha adoptado respecto de este tipo de considerandos, se aparta de la propuesta.

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que quedaba encorchetado el considerando sexto del proyecto y sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo del proyecto que abarca nueve conceptos de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso que en relación con el primer concepto de invalidez, su proyecto propone que la autoridad competente para determinar la equivalencia de las normas oficiales mexicanas con los reglamentos técnicos de Estados Unidos y Canadá, es la referida Secretaría, pues corresponde a esta dependencia coordinar y dirigir las actividades internacionales de normalización, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, así como expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte.

El señor Ministro Cossío Díaz agradeció el haber dejado encorchetado el considerando anterior. Preciso que el segundo párrafo del artículo 131 constitucional otorga competencias al Ejecutivo Federal e indicó que por una parte

se encuentra el Ejecutivo Federal unipersonal como Presidente de la República y, por otra, la administración pública como relación de subordinación; sin embargo, en este caso se está ante una competencia exclusiva de su titular, para que en situaciones que estime urgentes pueda aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso, así como para crear, restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos.

Consideró que debe contraponerse dicho precepto constitucional con la libertad de comercio, por lo que no se trata de una facultad amplísima sino que al introducir medidas excepcionales que debe de autorizar el Congreso de la Unión, se tiene una contrapartida con dicho derecho.

Estimó que en el caso se presenta una sustitución de fuentes al aceptar como equivalentes a una norma oficial mexicana ciertas determinaciones provenientes de otros países de conformidad con lo previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que en un primer plano, se está ante la norma oficial mexicana establecida a partir de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional por la vía de pesas y medidas como una atribución exclusiva del Congreso de la Unión.

Manifestó interrogantes respecto de que el Secretario de Economía esté facultado para modificar una norma oficial mexicana que cuenta con un procedimiento específico

sustituyéndose al Presidente de la República y determinando con base en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional las condiciones de comercio exterior y estableciendo fuera del procedimiento de creación o modificación de una norma oficial mexicana, los contenidos de una norma de esa naturaleza, pues se trata de una cuestión de derecho interno y no de un compromiso internacional.

Precisó que para la modificación de los acuerdos de equivalencia, es necesario seguir los procedimientos previstos para la modificación de una norma oficial mexicana, pese a que en el Acuerdo de la Secretaría de Economía existe una opción en materia de comercio exterior y otra en la materia de metrología, tratando de introducir argumentos de derecho internacional a través de una norma de derecho nacional, lo que estimó inadecuado, por lo que consideró que le asiste la razón al Senado de la República al impugnar esta situación, pues los compromisos internacionales deben cumplirse en su sede sin afectar las normas oficiales mexicanas, por lo que se manifestó en contra de la propuesta.

El señor Ministro ponente Valls Hernández precisó que en el proyecto no se sostiene que se esté modificando una norma oficial mexicana, sino que en respuesta al segundo concepto de invalidez se está afirmando que no se da esta situación. Asimismo, agregó que el Secretario de Economía reglamenta administrativamente la operación de un tratado

internacional a través del derecho nacional, por lo que se manifestó en contra de las observaciones del señor Ministro Cossío Díaz.

El señor Ministro Cossío Díaz se refirió a la página ciento once del proyecto de donde desprendió que el Acuerdo de Equivalencia se equiparó a la norma oficial mexicana e indicó que existen diversos procedimientos para internalizar en el orden jurídico nacional dichos acuerdos.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra de la propuesta. Se refirió a los antecedentes de la norma oficial mexicana impugnada y del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Refirió que el acuerdo impugnado se fundamentó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte así como en los artículos 133 de la Constitución, 34, fracciones I y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 5°, fracciones III y X, de la Ley de Comercio Exterior, 39, fracciones X y XII, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y en el diverso 5° del Reglamento Interior.

Indicó que la Ley de Metrología y Normalización entró en vigor con anterioridad a dicho Tratado de Libre Comercio; sin embargo, no se reguló la forma en que debían establecerse los acuerdos de equivalencia para determinar las mercancías procedentes del extranjero con las producidas dentro de nuestro país y precisó que posteriormente se modificó dicha ley para prever la

posibilidad de establecer desde el punto de vista nacional, las equivalencias de los productos extranjeros en relación con los nacionales y permitir la compatibilidad de la normalización extranjera con la nacional, así como la evaluación y el cumplimiento de dichas normas.

Dio lectura, en lo conducente al proceso legislativo de la Ley Federal de Metrología y Normalización reformada en mil novecientos noventa y siete e indicó que a partir de mil novecientos noventa y tres se estableció la autorregulación y la ausencia de discrecionalidad por parte del Secretario de Comercio para la determinación de estas normas, así como la participación de la iniciativa privada.

Precisó que el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete, el Titular del Ejecutivo envió un decreto de reformas a partir de razones similares e indicó que el Senado se duele que dicho decreto invade sus facultades pues una norma de esa índole requiere de una legislación emitida por dicho órgano.

Asimismo precisó que a partir de las equivalencias contenidas en el decreto de mérito se resta la discrecionalidad que anteriormente se otorgaba al Secretario de Economía y que las normas se basan en un estándar internacional sin fijar la razón de las equivalencias y sin participación alguna del sector privado en contravención de lo previsto en la Ley de Metrología y Normalización e indicó que la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

opinión sobre el particular en el sentido de que existe una imposibilidad de la autoridad para evaluar como acto de autoridad la seguridad de productos por no existir armonización de las disposiciones técnicas aplicables entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ende, se manifestó en contra de la propuesta.

A las trece horas con cinco minutos el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con treinta minutos.

La señora Ministra Sánchez Cordero consideró que el artículo 906 del Tratado de Libre Comercio prevé que debe considerarse equivalente un reglamento técnico cuando se demuestre que cumple adecuadamente con los objetivos legítimos de la parte importadora, sin prever la forma en que se otorgará dicho reconocimiento, por lo que corresponderá hacerlo al sistema jurídico nacional.

Estimó que reconocer la equivalencia de los reglamentos técnicos de Estados Unidos de América y de Canadá en el Tratado de Libre Comercio implica una modificación material de sus alcances vinculantes, así como la creación de nuevos procedimientos de normalización que sólo podrían derivar legítimamente de la modificación formal de las respectivas normas oficiales mexicanas conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización y, de un acuerdo de reconocimiento mutuo en

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

condiciones de reciprocidad, conforme a los diversos 87-A y 87-B del mismo ordenamiento.

Consideró que lo anterior permitiría que nuestro país cumpla con el compromiso adquirido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tutelando la vertiente democrática y de participación ciudadana; la potestad legislativa del Congreso de la Unión a la se encuentran sujetas las autoridades; la mejor observancia de los principios constitucionales que dirigen la política exterior, así como la preservación de los fines de beneficio mutuo postulados y la garantía de las condiciones previstas en el instrumento internacional de mérito.

Sometida a votación la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, en contra de las consideraciones; Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo, en cuanto se determina declarar infundado el segundo concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso que su proyecto propone que no se modifica el ámbito material de validez de las normas oficiales mexicanas, pues los

requisitos y procedimientos que establecen, así como las causas que las motivan, permanecen vigentes, pudiendo acreditarse, ante las autoridades competentes de un Estado Parte, el cumplimiento de los fines y estándares señalados en las mismas, o bien, el cumplimiento de los mismos fines e iguales o mayores estándares establecidos en las normas o reglamentos técnicos de otro Estado parte.

Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos precisaron que de acuerdo con los argumentos vertidos en el apartado anterior, se manifestarían en contra de la propuesta.

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo en cuanto se propone declarar infundado el tercer concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso que su proyecto sostiene que se garantiza el principio de reciprocidad internacional, al permitir que en igualdad de condiciones, los Estados Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tengan la posibilidad de

solicitar un trato equivalente de su normativa nacional, independientemente de si con posterioridad y en virtud de haber cubierto los aspectos requeridos por el Estado parte que, en su caso, aceptara la solicitud, la equivalencia le sea o no reconocida; asimismo, que no se requiere un previo y especial acuerdo para determinar la equivalencia entre los certificados de evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas con los estándares internacionales, dado que es el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte el que establece, en su artículo 906 la necesidad de que las partes hagan compatibles en el mayor grado posible sus respectivas medidas relativas a la normalización, con el fin de facilitar la comercialización de un bien o servicio entre ellas, proponiendo la equivalencia como método para conseguirlo y estableciendo que, para que sea posible, sólo se requiere, por un lado, que un Estado Parte solicite el otorgamiento de un trato equivalente de sus normas frente a la normativa de otro y, por otro, que cumplan de manera adecuada los mismos objetivos y que los resultados del procedimiento de evaluación de la conformidad respectivos otorguen una garantía satisfactoria del mismo grado al que otorga la norma del país que aceptaría la equivalencia.

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo, en cuanto se propone declarar infundado el cuarto concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso que la Cámara de Senadores argumenta que para establecer la equivalencia el Secretario de Economía debió impulsar ante las instancias correspondientes el análisis conjunto entre los Estados parte de ese tratado internacional de las medidas relativas a normalización; promover la celebración de un acuerdo que prevea las adecuaciones correspondientes de los reglamentos técnicos y/o Estándares Extranjeros y propicie que se declare la equivalencia recíproca entre determinadas normas oficiales mexicanas y ciertos estándares extranjeros, así como sus procedimientos de evaluación de la conformidad; instar el procedimiento para la modificación de las normas oficiales mexicanas, la autorización de mecanismos alternativos para cumplir con las finalidades de las mismas y, en su caso, la creación de nuevos procedimientos de normalización y de evaluación de la conformidad, o bien, para la aceptación de sus resultados, conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo que resulta infundado.

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo en cuanto se propone declarar infundado el quinto concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández señaló que la Cámara de Senadores argumenta que la equivalencia otorgada por el Secretario de Economía a los procedimientos y certificados de evaluación de la conformidad con los estándares extranjeros, es consecuencia directa y necesaria de la otorgada a los reglamentos técnicos respecto de las normas oficiales mexicanas, de manera que, al serle accesoria a esta cuestión principal, debe seguir la misma suerte que ella y ser invalidada, lo que resulta infundado.

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo, en cuanto propone declarar infundado el sexto concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández indicó que la Cámara de Senadores argumenta que resulta contrario a derecho que el Secretario de Economía se hubiese “auto facultado” para extraer de un listado las entidades extranjeras cuyos certificados son equivalentes a los emitidos por organismos mexicanos, sin establecer ningún parámetro de evaluación y control para ello, lo que resulta infundado.

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo en cuanto se propone declarar infundado el séptimo concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández expuso que la Cámara de Senadores sólo afirma que determinadas disposiciones que se prevén en los Acuerdos de Equivalencia y en la Vigésima Modificación impugnados,

constituyen actos en sentido estricto, por tratarse de normas jurídicas con efectos particulares, lo que resulta infundado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra de la propuesta pues al resolverse la reclamación 33/2010 en la Primera Sala, tanto la señora Ministra Sánchez Cordero como él, sostuvieron que se trató de actos complejos que tenían normas generales y particulares y precisó que en dicho asunto formuló voto particular.

La señora Ministra Sánchez Cordero se manifestó en el mismo sentido.

Sometida a votación la propuesta, se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea y Sánchez Cordero votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo, en cuanto se propone declarar infundado el octavo concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández precisó que la Cámara de Senadores argumenta que los numerales 2 y 3 de los Acuerdos de Equivalencia impugnados, relacionados con la determinación de que los estándares extranjeros cumplen adecuadamente los objetivos de las normas

oficiales mexicanas y los procedimientos de evaluación de la conformidad con aquéllos garantizan satisfactoriamente los objetivos de estas últimas, no fueron sometidos a amplio debate y escrutinio, por lo que no podría asegurarse que gozan de corrección técnica, ni de objetividad, pues derivan de la opinión unilateral y subjetiva del Secretario de Economía, lo que resulta infundado.

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando séptimo en cuanto se propone declarar infundado el noveno concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Valls Hernández señaló que la Cámara de Senadores argumenta que dado que las normas impugnadas resultan inconstitucionales, los certificados expedidos por organismos extranjeros, a los que hace referencia el numeral 4 de los Acuerdos de Equivalencia y el párrafo tercero de la Vigésima Modificación, también resultan inconstitucionales, pues adolecen de los mismos vicios, al apoyarse en tales normas, lo que resulta infundado.

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

Sometida a votación económica la propuesta, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

Por ende, los puntos resolutive se aprobaron en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se reconoce la validez del “Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá”, el “Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos

y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá”, el “Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá” y la “Vigésima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior”; todos expedidos por la Secretaría de Economía y publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de agosto de dos mil diez.

TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

Sometida a votación la propuesta del proyecto, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, salvo por lo que se refiere a la respuesta del séptimo concepto de invalidez; Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, salvo por lo que se refiere a las consideraciones que sustentan la respuesta al primer concepto de invalidez y a la respuesta del séptimo concepto de invalidez; Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos votaron en contra.

Sesión Pública Núm. 13

Martes 29 de enero de 2013

Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos reservaron su derecho para formular voto particular, en tanto que la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas reservó el suyo para formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos planteados.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves treinta y uno de enero de dos mil trece, a partir de las once horas, y levantó la sesión a las catorce horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.